



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

|            |  |
|------------|--|
| PROCESO    | Verbal – Responsabilidad civil contractual               |
| DEMANDANTE | Eslany Álvarez Pineda                                    |
| DEMANDADOS | Fase G Proyectos S.A.S. y Estructuras y Desarrollos S.A. |
| RADICADO   | 05001 31 03 021 2022 00033 01                            |
| DECISIÓN   | Revoca auto apelado                                      |

Medellín, veintidós de marzo de dos mil veinticuatro

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En diligencia de 30 de enero de 2024 el Juzgado 021 Civil del Circuito de Medellín negó la incorporación de los documentos denominados "*recibos de cánones de arrendamiento y contrato de arrendamiento*" y negó la prueba testimonial requerida. Como cimiento de la decisión tuvo en consideración que la petición probatoria no cumplía con lo dispuesto en los artículos 104 y 251 del C.G.P. Determinó que la última norma relacionada señala que la traducción debe ser presentada directamente con el documento, en atención a que el nombramiento del traductor por el juez en la forma solicitada, solo procede cuando se presente una controversia sobre el contenido de la traducción. Finalmente, definió que la prueba testimonial no cumplía lo previsto en el artículo 212 del C.G.P.

1.2. Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. Con ese fin, sostuvo que con base en el artículo 104 del C.G.P., el juez designará un servidor o un auxiliar particular que preste la función de interprete o traductor, quien tomará la posesión para el encargo en la misma audiencia. Expuso que no estaba de acuerdo con la negación del nombramiento de un traductor para los recibos

destinados a demostrar el pago de los cánones de arrendamiento del demandante.

1.3. Surtido el traslado, el abogado de la parte demandada se pronunció y dijo que “se allanaba” a los argumentos expuestos por el juez, en cuanto a que la solicitud de traductor no cumplió las formalidades, motivo por el cual no habría lugar a que la decisión se reponga.

1.4. El juzgado de primera instancia resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable y concedió la alzada. Como fundamento sostuvo que el artículo 104 del C.G.P. señala, en relación con la utilización del idioma castellano que, el trámite jurisdiccional se adelantará en este idioma y los servidores judiciales que dominen las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, oficiales en sus territorios, podrán llevar a cabo las audiencias con el empleo de tales expresiones lingüísticas, a solicitud de parte y el juez designará un servidor, auxiliar de la justicia o particular para que preste la función de intérprete, quien tomará posesión para ese encargo en la misma audiencia. En el evento en que sea necesario, de oficio o a petición de parte, se hará la traducción correspondiente. Lo anterior, en los casos en que haya partes que no hablen o entiendan el idioma castellano. Entonces, el trámite de las diligencias y del proceso se debe hacer en idioma castellano y cuando haya una parte que no sea hispanohablante, es necesario nombrar un traductor.

Ahora, en cuanto a las pruebas en idioma extranjero, anotó que el artículo 251 del C.G.P. dispone que, para que se valoren, se deben traducir y que los documentos extendidos en idioma distinto al castellano deben traducirse, bien sea, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por un traductor designado por el juez. El artículo precisa que, en los dos primeros casos, o sea, en las traducciones hechas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el intérprete oficial, la traducción puede presentarse directamente y que, en caso de controversia, el juez designará traductor. Tal regla aplica para los documentos privados, porque los documentos públicos otorgados en el extranjero tienen un trámite diferente. En esa medida, el juzgado concluyó que la parte interesada debió allegar el documento traducido y que solo cuando la contraparte estuviera en desacuerdo sobre el contenido de dicha traducción, se designaría a un traductor para resolver lo propio.

1.5. Después, la parte recurrente allegó memorial en que amplió el recurso de apelación. Dijo que el juez no rechazó las pruebas documentales por alguna causal prevista en el artículo 168 del C.G.P. (ilicitud, impertinencia, inconducencia, etc.) Agregó que el operador judicial no debió rechazar la prueba, sino nombrar un traductor, o en su defecto, decretar otro medio probatorio que estimara procedente, porque para negarla tendría que aducir alguna causal del artículo mencionado. Advirtió que el artículo 251 ibídem, prevé tres eventos para que los documentos extendidos en idioma extranjero puedan ser apreciados como prueba, entre los cuales se encuentra la designación de un traductor por parte del juez, así que el juez podrá designar un traductor a solicitud de parte, sin perjuicio de la facultad de disponer pruebas de oficio.

Argumentó que admitir la posición del juzgado, daría a entender que solo existe dos formas de presentar la traducción de los documentos en idioma distinto del castellano, dejando por fuera la posibilidad de que el juez designe un traductor. Expuso que las pruebas rechazadas dan cuenta de los gastos en que el demandante ha incurrido por el incumplimiento contractual de los accionados, por lo que la negación por las razones dadas por el despacho obedece a una interpretación errada de la norma.

#### CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 173 del C.G.P. prescribe los requisitos para las solicitudes probatorias. Al respecto, la norma señala:

*"ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.*

*En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado.*

*...".*

2.2. Por su parte, el artículo 251 del C.G.P. establece las reglas para la valoración de los documentos en idioma extranjero. En este sentido, la disposición prevé:

*"ARTÍCULO 251. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.  
...".*

2.3. Por otro lado, el art. 168 del C.G.P. señala que, mediante providencia motivada, el juez rechazará de plano *"las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles"*.

#### CASO EN CONCRETO

El recurso plantea resolver si el juez de primer nivel tuvo razón al negar la incorporación de la prueba documental (recibos de pago cánones de arrendamiento y contrato de arrendamiento), solicitada por la parte demandante, porque, al tratarse documentos en idioma extranjero, se debían con la respectiva traducción.

Al respecto se tiene que lo definido por el *a quo*, obedece a la lectura que hace de lo previsto en el art. 251 del Código General del Proceso en concordancia con las facultades actuales de dirección ágil del proceso tendientes a que las partes lleven al proceso las pruebas, se facilite la contradicción y se reduzca en cuanto sea posible la gestión de práctica de pruebas en el juzgado. Mírese por ejemplo que el numeral 10 del art. 78 del C.G.P. refiere entre los deberes de las partes el de *"Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de*

*documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir”, o la nueva regulación de la prueba pericial dirigida a que los dictámenes sean aportados por las partes (artículos 227 y 228). También se dispone que el juez “se abstendrá de ordenar la práctica de pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicitó...”. O sea que lo dicho por el juez respecto a la prueba documental aportada en forma incompleta porque no se acompañó de la traducción, luce razonable en general, pero en este caso en particular deja de lado que desde la reforma a la demanda la parte demandante pidió tener como prueba los documentos en inglés que aportó, respecto a los cuales pidió que *"De considerar necesario la traducción de los recibos de pago de canon de arrendamiento y el contrato de arrendamiento, se solicita asignar un traductor de la lista de auxiliares de la justicia para dicha función"*, sin que tal pedimento deleve alguna ilicitud del medio probatorio ni se advierta que para rechazar esas pruebas, el juez haya esgrimido que resultaban notoriamente impertinentes, o inconducentes o manifiestamente superfluas.*

Ahora, con la reforma a la demanda se incrementó el valor de las pretensiones y el asunto pasó a ser de mayor cuantía, el juzgado municipal determinó el envío del asunto al juzgado del circuito quien asumió el conocimiento y proveyó actuaciones para continuar el trámite del proceso y cuando se llegó al momento de decretar las pruebas el juez negó la incorporación de la documental en idioma extranjero porque no fue acompañada la traducción correspondiente, sin aducir, tal como el abogado recurrente advirtió, alguna de las causales de rechazo previstas, de manera que a la parte solicitante se le debe dar la oportunidad de complementar la prueba con la traducción requerida, para que pueda ser incorporada al acervo probatorio y sometida a contradicción. A ello se añade que en el traslado de la reforma de la demanda la contraparte no se pronunció sobre dichas pruebas.

En tales circunstancias y recurrida como ha sido la negativa a la incorporación de la prueba documental en idioma extranjero, procede la revocatoria de esa decisión para que en su lugar se requiera a la parte aportante y en un plazo razonable que el juez conceda, basado en previsiones legales como las indicadas en el art. 227, del C.G.P. se traiga la traducción de cada uno de esos

documentos para que puedan ser incorporados al proceso y se surta la oportunidad de contradicción.

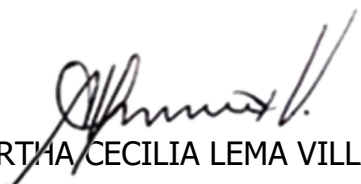
En suma, la decisión del Juzgado 021 Civil del Circuito de Medellín de 30 de enero de 2024 que negó la incorporación de la prueba documental en idioma extranjero, será revocada, y en su lugar se ordenará al despacho en mención que otorgue un término prudencial a la parte demandante para que aporte la respectiva traducción de los documentos aportados en idioma extranjero, que denominó *"recibos de pago de cánones de arrendamiento y el contrato de arrendamiento"*, para que puedan ser incorporados al proceso y se surta la oportunidad de contradicción.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR la decisión adoptada en auto de 30 de enero de 2024, proferida por el Juzgado 021 Civil del Circuito de Medellín y en su lugar ORDENAR al despacho que otorgue a la parte demandante un término prudencial para que aporte al proceso la traducción de los documentos que denominó *"recibos de pago de cánones de arrendamiento y el contrato de arrendamiento"*.

SEGUNDO. Sin condena en costas ante la prosperidad del recurso.

NOTIFÍQUESE

  
MARTHA CECILIA LEMA VILLADA  
Magistrada